



CONSEJO NORUEGO
PARA REFUGIADOS

Norwegian Refugee Council

FRONTERAS

22 de Julio de 2004



Mayo & Junio de 2004

Frontera con Ecuador

El drama de los refugiados colombianos en Ecuador y el Plan Colombia¹: Desde hace tres años, de lunes a viernes, entre 100 y 150 personas llenan el parqueadero del Comité Pro refugiados del ACNUR en Quito, Sucumbíos, Ibarra, San Lorenzo, Cuenca y Santo Domingo, a la espera de un turno para solicitar refugio en Ecuador. El 99.9% proceden de Colombia. Hasta 1999, en Ecuador había oficialmente 140 colombianos conocidos como refugiados. Desde el año 2000 --año en que comenzó la aplicación del Plan Colombia y se implantó la dolarización en Ecuador-- hasta el año 2003, 22.000 colombianos han solicitado refugio. De ellos, sólo 6.080 (dato de 27 de marzo de 2004), han obtenido una respuesta positiva.

En estos tres años se han multiplicado los desplazamientos masivos desde poblaciones fronterizas colombianas hacia las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, El Carchi, y Sucumbíos. En la población del Carchi, por ejemplo, el pasado 24 de marzo llegó un importante grupo de desplazados (entre 150 y 500), provenientes de la población colombiana de Chiles. Según Daniel Alarcón, Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, las fumigaciones con glifosato en la frontera entre Ecuador y Colombia han provocado el desplazamiento de 6000 familias ecuatorianas hacia el interior de su país. Aunque el gobierno ecuatoriano insiste en que “las fumigaciones son inofensivas”, un estudio de la Universidad Católica de junio de 2003, reveló casos de cáncer, alergias y afecciones respiratorias debidos al glifosato.

Según Inés Faccioli, directora del Comité Pro refugiados del ACNUR, la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador no es buena, no sólo por las amenazas proferidas por los distintos grupos armados, sino también por el creciente clima social de xenofobia hacia los colombianos. También, afirma Faccioli, se han recibido denuncias de que la policía ecuatoriana destruye o confisca los documentos de identidad, como las tarjetas andinas de migración y los certificados provisionales de solicitantes de refugio, pretendiendo, en última instancia, obtener dinero al quitarle un documento a una persona.

La falta de fondos del ACNUR también es preocupante. Mientras que ACNUR Ecuador apenas cuenta con un presupuesto de 1.4 millones de dólares para el 2004,

¹ www.cedhu.org.html/modules.php

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recibió 12 millones de los fondos del Plan Colombia (canalizados a través de la USAID) para su programa del 2004. Preocupado ante la amenaza de que la OIM/USAID reemplacen la misión del ACNUR en Ecuador, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, anunció recientemente que la ONU llevaría a cabo una “evaluación interagencial” de la región ubicada en la frontera norte del Ecuador, con el fin de iniciar un programa de desarrollo en esa área.

Uribe pide a Ecuador buen ánimo frente al Plan Patriota². *“Ecuador no debe temer y debe hacer buena cara al Plan Patriota. A Ecuador le conviene tener un vecino y hermano con seguridad, sin droga y fortalecimiento democrático³”*. La anterior afirmación la hizo el presidente colombiano en una reunión celebrada con motivo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, convocada por los Estados Unidos, y en la que también participaron representantes de Ecuador y Perú. Aunque el gobierno ecuatoriano insiste en que no se involucrará en ninguno de los planes militares de Colombia, las declaraciones de oficiales colombianos lo desmienten. El 20 de mayo de 2004, Jorge Londoño, comandante de la Brigada 27 del ejército colombiano, informaba al Universo que “esperamos un intercambio de inteligencia y planeamiento de operaciones con unidades enfrentadas y esto lo programan el comandante de nuestro ejército con el ecuatoriano. Está pendiente la fecha para intercambiar planes y desarrollar acciones conjuntas en las fronteras”.

Poco a poco ha ido cambiando la actitud y el papel de Ecuador hacia la guerra en Colombia. Mientras que en febrero de 2003 Gutiérrez proclamó que “las fuerzas armadas de Ecuador nunca se involucrarán en una guerra que no es nuestra”, Gutiérrez ha triplicado el número de fuerzas en la región de la frontera norte⁴, estacionando 15,000 soldados ecuatorianos en la frontera con Colombia.

El desplazamiento masivo, cuyos costos humanos y económicos tendrá que asumir en parte Ecuador, ya se ha dejado sentir en tan sólo tres meses de ejecución del Plan Patriota. El periódico El Tiempo de Bogotá reseñaba en fechas recientes que sólo en el municipio de Peñas Coloradas en el Caquetá se han desplazado 1200 campesinos. Según una fuente militar consultada por El Universo, el Plan Patriota prevé, sólo en el sector del Caguán, el desplazamiento de 17.000 campesinos durante las próximas operaciones bélicas. Según Jorge Rojas, de la Organización CODHES de Bogotá, los 500.000 habitantes de esta zona, sólo tendrán dos opciones para vivir “*se meten en la guerra o se van*”. “*Y los que decidan irse lo harán hacia el sur (es decir, hacia la frontera con el Ecuador), porque el norte está bajo el control de las AUC, y las principales ciudades del país están saturadas de desplazados*”. Asimismo, Ecuador está adoptando cada vez más una visión de que los inmigrantes

² www.cedhu.org/html/modules.php

³ Declaraciones del Presidente Uribe, 27 mayo de 2004, Cartagena, Col.

⁴ En las provincias de Esmeraldas, Ibarra, Tulcán y Sucumbíos.

y refugiados que ingresan al país son una amenaza potencial para su seguridad interna.

El episcopado en Ecuador pide más ayuda para los refugiados colombianos⁵.

La Conferencia Episcopal ecuatoriana –CEE-, hizo un llamado al gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez, con el objetivo de mejorar la atención a los refugiados colombianos que llegan al Ecuador huyendo de la violencia armada en su país. En una entrevista concedida a la Agencia Española EFE, la directora del departamento de movilidad humana de la CEE, Sor Janette Ferreira, destacó que las diferentes sugerencias al gobierno han sido presentadas en la forma de un libro titulado “hacia una visión compartida del conflicto colombiano en los países vecinos”, escrito por la iglesia católica y el ACNUR. Según fuentes del ACNUR, más de 300.000 colombianos residen en el Ecuador, 7000 de ellos como refugiados. Pero en los últimos 5 años, las autoridades ecuatorianas han recibido 27.000 solicitudes de refugio. *“Lo más importante es la regularización de los colombianos, y si pudiéramos ayudar a que los desplazados tengan una situación regular en el Ecuador, ellos podrían ser un factor de desarrollo y de contribución a la producción general del país”*, explicó la religiosa.

Propone fin de Convenio de la Base de Manta

El Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia propone dar por finalizado el convenio de la Base de Manta con el objetivo de sacar a Ecuador de los planes belicistas de los gobiernos estadounidense y colombiano. Además, previenen sobre las consecuencias de la implantación del Plan Patriota de Colombia. El Grupo de Monitoreo reforzó su pedido al Congreso ecuatoriano por el rompimiento del convenio con EE.UU. presentando un pronunciamiento que consta de 19 puntos.

El un pronunciamiento hecho el día 5 de mayo, el general René Vargas Pazzos y el Defensor de Derechos Humanos, Alexis Ponce, que forman parte del Grupo, afirmaron que con el Plan Patriota que se pretende instalar en ciudades colombianas ubicadas en la frontera con Ecuador, se estaría comprometiendo a este país y el conflicto interno de Colombia se estaría regionalizando.

La Base de Manta está ubicada a 20 minutos de vuelo de las principales zonas de conflicto colombiano y representa una posición estratégica para el control militar del conjunto del Pacífico Sur, del Canal de Panamá y Centroamérica. Los denominados Puestos de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) como el de Manta, se presentan como centros destinados exclusivamente a operaciones antidrogas, pero en realidad son bases militares encubiertas que luchan contra los movimientos insurreccionales, realizan trabajos de inteligencia militar contra movimientos sociales contestatarios y partidos de izquierda en la región andina.

⁵ www.aciprensa.com, 9 de julio de 2004

ACNUR denuncia aversión a refugiados colombianos⁶. El representante del ACNUR en Ecuador, José Uceda, indicó que ese ente pondrá en marcha una estrategia que permita crear conciencia entre los ciudadanos ecuatorianos y se propicie la ayuda que necesitan los refugiados colombianos.

Aumenta pie de fuerza en la frontera⁷. Con el ánimo de controlar la entrada de delincuentes y elementos irregulares a sectores urbanos y rurales de la provincia del Carchi, las autoridades ecuatorianas han desplegado más de 600 uniformados de la policía y el ejército los cuales se encuentran vinculados a los operativos de seguridad en haciendas, fincas y vías rurales de esta zona fronteriza con Colombia. El Coronel Ramón Henríquez, primer comandante del Batallón de Infantería 39, es el encargado de los operativos los cuales se extienden también a mercados, plazas, parques, avenidas y lugares de acceso al público. Estas acciones van encaminadas a luchar contra los secuestros de ganaderos y comerciantes por parte de los grupos ilegales que operan en este sector fronterizo. Estos operativos también van dirigidos a reducir los secuestros y extorsiones en territorio ecuatoriano, llevados a cabo por grupos subversivos colombianos.

Se deportará a los extranjeros ilegales⁸. Desde el 1 de julio, los extranjeros residentes en el Ecuador tendrán que tener todos sus papeles en regla, entre ellos su carné ocupacional, ya que de lo contrario serán deportados. Este hecho, y debido a la mayoritaria presencia de colombianos entre el grupo de extranjeros que viven en el Ecuador, hace presumir que entre estos últimos se darán los mayores problemas. En Santo Domingo de los Colorados la presencia de colombianos es cada vez mayor y la integración con la comunidad de acogida es relativamente buena. Esta se manifiesta por la activa participación en el ámbito económico, con la existencia de decenas de locales – no hay registro oficial- como panaderías, supermercados, almacenes de ropa, y bares establecidos. Sin embargo, la población de Esmeraldas empieza a temer por la presencia de colombianos que llegan a vivir o están de paso por la provincia, por los actos violentos en los que se les acusa de ser protagonistas. En Ibarra, hay mayor desconfianza que en Tulcán, donde se les contrata con más facilidad.

Frontera con Venezuela

Cerca de 200 colombianos huyen hacia Venezuela por el incremento de la violencia en Arauca⁹. El ACNUR informó que un grupo de colombianos huyó esta semana de su país y se refugió en el estado sur occidental de Apure, a unos 600 Km. de Caracas. Según la misma fuente, el ACNUR y la Iglesia Católica (Servicio Jesuita

⁶ www.diariodelsur.com.co

⁷ www.diariodelsur.com.co

⁸ www.lahora.com.ec, 9 de julio de 2004

⁹ www.eltiempo.terra.com de 9 de julio de 2004

para los Refugiados-SJR), están prestando atención a los colombianos, los cuales se alojaron temporalmente en una antigua planta de palma aceitera situada a orillas del río Arauca. Algunos de los colombianos manifestaron su deseo de pedir refugio, mientras otros señalaron que aspiran retornar a Colombia cuando se calme la situación de violencia. El representante del ACNUR en la zona comentó que el número de refugiados en el estado de Apure ha incrementado durante este año, al pasar de 299 a principios de año a 1.117 a finales de mayo de 2004.

En una visita realizada por el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) al municipio de Páez en el estado de Apure, entre los días 7 y 8 de julio de 2004, el CNR confirmó la presencia de unos 100 refugiados provenientes de la vereda de Puerto Lleras. Allí se llevó a cabo una reunión con varios líderes de la comunidad, los cuales manifestaron su temor por los recientes combates entre el ejército colombiano y las FARC, lo cual al parecer motivó su huída hacia territorio venezolano. Los entrevistados afirmaron que el ejército incrementó el pie de fuerza en la vereda de Puerto Lleras, con la intención de combatir el contrabando fronterizo. Por último, informaron que cerca de 100 personas habrían cruzado la frontera en forma escalonada en los últimos 15 días, elevando el número total de refugiados provenientes de Puerto Lleras a cerca de 200 personas. Los refugiados están siendo atendidos y registrados por el ACNUR, y el SJR en situ.

Defensoría del Pueblo confirma desplazamientos de indígenas Wayuu: El 8 de julio, la Defensoría del Pueblo reportó la muerte de una persona y el desplazamiento de 500 indígenas, producto de los enfrentamientos. Sin embargo, aclaró que no tiene confirmación de 13 asesinatos cometidos en abril por grupos de autodefensa y que fueron denunciados la semana anterior por la Organización Nacional Indígenas de Colombia (ONIC)¹⁰.

Detrás de los asesinatos de indígenas Wayuu y las desapariciones de 30 más en el departamento de la Guajira, hay intereses más grandes que el contrabando de droga y armas por parte de los paramilitares. Los verdaderos intereses se esconden detrás de la explotación transnacional del petróleo, el carbón y la cercanía a Venezuela y a la base militar estadounidense en Aruba.

Venezuela dispuesta a recibir refugiados colombianos¹¹. *“Venezuela está lista para recibir hasta 9.000 personas si arrecia el conflicto armado en ese país”, afirmó Ricardo Rincón, Jefe de la Comisión Nacional para los Refugiados. “Estamos preparados para atender de 8.000 a 9.000 personas, preparados para esa contingencia”. Venezuela puede armar en 48 horas un plan para recibir a esas personas, a través de Protección Civil, del Ministerio de Defensa, la Cancillería y la Fiscalía.*

¹⁰ El Colombiano, 8 de julio

¹¹ www.talcualdigital.com/avances de 9 de julio de 2004

La masacre de 34 campesinos en el noreste colombiano atribuida a insurgentes de las FARC¹². El martes 15 de junio en La Gabarra, una unidad de las FARC habría fusilado a 34 personas a los que calificó de narco paramilitares, según la versión gubernamental. De acuerdo a la prensa, se trataba de campesinos previamente contratados para preparar un campo de cultivo de coca.

El asesinato tendrá una serie de repercusiones para la región del Catatumbo. Tras la masacre, el gobierno anunció una posible duplicación de las fuerzas de seguridad que forman parte de la 'operación holocausto' que se implementa desde septiembre del 2003. En la actualidad, se encuentran desplegados 5,000 soldados para "recuperar la gobernabilidad y garantizar la presencia del estado". Desde el 1º de Julio, las fuerzas antinarcóticas colombianas están fumigando los campos de coca en el Catatumbo, lo que según el gobierno servirá para bajarle el tono a la disputa territorial entre las fuerzas en conflicto.

En versiones de algunos pobladores de la zona, la disputa entre los paramilitares y la guerrilla es por el territorio de la coca. El Estado hace presencia sólo en los centros urbanos y en las vías centrales estableciendo retenes a personas conocidas e impidiendo la comercialización de productos. El Estado hace presencia en los momentos que ocurrieron los asesinatos. Frente a la grave situación de la región - pobreza, ausencia del Estado, presencia de las autodefensas, tres grupos guerrilleros (FARC, ELN y EPL) y 30,000 hectáreas de coca, no existen planes claros por parte del gobierno para la protección de la población civil.

Continúa desplazamiento de colombianos hacia frontera venezolana¹³ (DDHH y Coyuntura – servicio informativo N° 139). Ricardo Rincón, presidente de la Comisión Nacional de Refugiados de Venezuela (CNR), firmó un acta convenio mediante la cual comprometió al Estado venezolano a dar protección a 292 integrantes del pueblo Wayuu, quienes desde mayo ingresaron a Venezuela víctimas de las acciones violentas emprendidas por grupos paramilitares colombianos en la frontera colombo/venezolana (Panorama, 03.07.04, pág. 1/7). El acta no contempla el otorgamiento de la condición de refugiado pues "ellos han manifestado regresar a su tierra, la Alta Guajira". Sin embargo, Rincón aclaró que "en caso de solicitar refugio, el Estado venezolano se lo brindaría mientras persista la inseguridad en sus tierras. Por motivo de la situación en Bahía de Portete, en la cual estos ciudadanos fueron objeto de violencia, secuestro, muerte y violación de sus derechos humanos [...] tendrán un tiempo de permanencia prorrogable de 90 días" (Panorama, idem). "La masacre de Bahía de Portete llevó a más de 400 familias Wayuu a abandonar sus tierras en el departamento de la Alta Guajira, lo que originó el éxodo masivo de sus pobladores hasta los corregimientos de Maicao, Urbilla y la ciudad de Maracaibo,

¹² www.ipsnoticias.net de 19 de junio de 2004

¹³ DDHH y Coyuntura – servicio informativo N° 139

hecho sin precedentes que vulneró el tejido social de la etnia” (La Verdad del Zulia, 01.07.04, pág. B/10).

Frontera con Panamá

IX Conferencia Regional sobre Migraciones: Expertos en protección consular y en el combate a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, iniciaron el 17 de Mayo de 2004, en Panamá, la IX Conferencia Regional sobre Migración que reunió en esa ciudad a viceministros de relaciones exteriores y de gobierno y justicia de América Central y del Norte así como de la República Dominicana.

En las sesiones sobre protección consular se discutieron los posibles mecanismos de coordinación para los fines de protección de migrantes. En las sesiones sobre el tráfico y la trata de personas se discutieron temas relacionados con la cooperación y la coordinación intergubernamentales para el combate de este flagelo.

Ambos temas son de gran relevancia para la conferencia, la que constituye un foro regional multilateral sobre migraciones internacionales en el que participan países que comparten, desde distintas perspectivas, una problemática común, con base a experiencias que involucran situaciones de origen, tránsito y destino de las migraciones.

Eventos & misiones

Declaración de Cartagena: En el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en colaboración y coordinación con el ACNUR y otras instituciones, están adelantando gestiones a nivel regional y continental con vistas a celebrar una conferencia conmemorativa el próximo mes de Noviembre en México.

La celebración de la conferencia será una gran oportunidad para examinar el impacto de la Declaración en la región desde su adopción, así como para abrir espacios de discusión y pensamiento en lo político, social y legal.